

DRC CONSEJO
DANÉS PARA
REFUGIADOS

DRC
COLOMBIA

Evaluación Rápida de Protección



Evaluación Rápida de Protección | Respuesta al terremoto Buenaventura, Valle del Cauca.



**Financiado por
la Unión Europea
Ayuda Humanitaria**

Este documento abarca las actividades de ayuda humanitaria con la asistencia financiera de la Unión Europea. Las opiniones expresadas en él no deben interpretarse en modo alguno como opinión oficial de la Unión Europea. La Comisión Europea no se hace responsable del uso que se pueda hacer de la información contenida en el documento.

1. Metodología	3
2. Contexto Buenaventura	4
3. Principales hallazgos de protección	5
3.1 Gobernanza armada, movilidad y acceso humanitario	5
3.2 Vivienda, alojamiento, documentación y seguridad de la tenencia	6
3.3 Riesgo de reclutamiento, uso y utilización de NNA	7
3.4 Explotación, VBG y mecanismos de afrontamiento perjudiciales	8
3.5 Exclusión de la asistencia, desinformación y riesgos para liderazgos comunitarios	8
3.6 Afectaciones psicosociales acumuladas	9
4. Recomendaciones	10
4.1 Instituciones del Estado	10
4.2 Organizaciones humanitarias	10



1. Metodología

La evaluación rápida de protección (ERP) se realizó entre el 26 de agosto y 03 de septiembre de 2026 en Buenaventura, Valle del Cauca, tras el terremoto de magnitud 7.4 del 10 de agosto 2026. La información se recopiló mediante 7 entrevistas con actores clave (EAC) y observaciones directas (OD) con el apoyo de la iniciativa

ProLACs¹, organizaciones, liderazgos comunitarios y población afectada, y se trianguló con fuentes secundarias de OCHA, UNGRD, autoridades locales y otras. Los hallazgos son indicativos de los lugares y actores consultados y no son estadísticamente representativos.

1. ProLAC, iniciativa regional de gestión de información de protección que ofrece un sistema armonizado de monitoreo de protección que funcione como base de evidencia para mejorar las respuestas de protección y humanitarias efectivas y eficientes a nivel regional, nacional, y local. consulte aquí: [ProLAC](#)

2. Contexto Buenaventura

El sismo de magnitud 7,4 ocurrido el 10 de agosto de 2026, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, afectó 16 departamentos y 497 municipios. Las afectaciones se concentraron principalmente en Risaralda, Valle del Cauca, Chocó, Quindío y Caldas, donde se registraron al menos 466.709 personas afectadas (296.738 familias), incluyendo 331 personas fallecidas, 4.505 heridas, 356 rescatadas y 111 desaparecidas².

En Buenaventura, el boletín unificado de la Alcaldía Distrital reportó inicialmente 10 personas fallecidas, 174 heridas y 3 desaparecidas³. Al 31 de agosto se registraban 28 personas fallecidas y 476 lesionadas. Según el Registro Único de Damnificados (RUD) de la UNGRD, con corte al 7 de septiembre, 31.654 familias (67.591 personas) se habían registrado como afectadas; 9.577 viviendas estaban inhabitables, 1.782 destruidas y 16.613 averiadas⁴.

La emergencia generada por el sismo coincidió con una crisis de protección preexistente vinculada al conflicto armado, exacerbando las vulnerabilidades de la población afectada en Buenaventura. En varios de los barrios evaluados, DRC identificó una presencia importante de hogares víctimas del conflicto, incluidas familias

previamente desplazadas, en un entorno caracterizado por la presencia de Grupos Armados No Estatales (GANE) y Grupos Delictivos Organizados (GDO), así como por dinámicas de control social y restricciones a la movilidad. En este contexto, las pérdidas de vivienda, medios de vida y documentación derivadas del terremoto se suman a trayectorias previas de desplazamiento y exposición a la violencia, profundizando vulnerabilidades acumuladas y erosionando capacidades de afrontamiento ya debilitadas.



2. OCHA (2026, 9 de septiembre). Colombia: Flash Update No. 12. Actualización afectaciones por terremoto en Colombia. Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

3. Navia, L. (2026, 15 de agosto). Balance preliminar en Buenaventura: 26 fallecidos, 433 heridos y más de 10.000 viviendas afectadas por el sismo. Noticias de Buenaventura y el Mundo.

<https://buenaventuraenlinea.com/balance-preliminar-en-buenaventura-26-fallecidos-433-heridos-y-mas-de-10-000-viviendas-afectadas-por-el-sismo/>

4. Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Registro Único de Damnificados (RUD). Datos para Buenaventura, corte al 7 de septiembre de 2026. Disponible en: <http://201.130.16.28:8080/HOME/HOME#>. El texto actual atribuye a esta fuente las 31.654 familias, 67.591 personas y las cifras de viviendas inhabitables, destruidas y averiadas.

3. Principales hallazgos de protección

Los hallazgos muestran que el terremoto ha agravado un entorno de protección preexistente, más que generar un escenario completamente nuevo. La pérdida de vivienda, bienes, medios de vida y documentación, el hacinamiento y la interrupción de servicios, educación y espacios comunitarios

están reduciendo capacidades de afrontamiento y aumentando la exposición a distintos riesgos de protección. Al mismo tiempo, varios actores clave reportaron una reducción temporal de los hechos de violencia y una apertura al acceso humanitario desde el sismo.



3.1 Gobernanza armada, movilidad y acceso humanitario

Antes del sismo, actores clave describieron restricciones de ingreso a determinadas comunidades y la persistencia de “líneas invisibles” que condicionan la movilidad entre barrios y sectores periféricos. Tras la emergencia, varios actores reportaron una disminución temporal de la violencia y un actor institucional señaló que organizaciones humanitarias han podido ingresar a comunidades anteriormente restringidas por GANE. Esta apertura, amplía temporalmente la capacidad de respuesta, pero el acceso continúa dependiendo de un entorno de control armado y

social. Existe, por tanto, el riesgo de que las restricciones reaparezcan a medida que disminuya la fase aguda de la emergencia, afectando la continuidad de la asistencia y el acceso de las comunidades a servicios y mecanismos de protección. Esta apertura para los actores humanitarios no elimina las restricciones que continúan condicionando la movilidad de la población entre barrios y hacia zonas donde se concentra la oferta institucional y humanitaria, especialmente desde sectores periféricos y rurales.



3.2 Vivienda, alojamiento, documentación y seguridad de la tenencia

Se identificaron personas y familias que perdieron documentos de identidad y soportes relacionados con la tenencia, propiedad o posesión de viviendas y tierras. Además de limitar el acceso a derechos, servicios y asistencia, esta pérdida puede agravar la inseguridad jurídica de hogares asentados informalmente y aumentar los riesgos de ocupación, despojo o apropiación indebida de predios durante la recuperación.

Este riesgo adquiere mayor relevancia por las trayectorias previas de desplazamiento de parte de la población afectada. En los barrios Pampalinda y Alberto Lleras, las comunidades rurales El Crucero, Las Brisas y La Estrella de Bajo Calima, y en el resguardo indígena Buenos Aires, DRC identificó hogares víctimas del conflicto armado, principalmente personas y familias con antecedentes de desplazamiento forzado. Registros de la UARIV reportan más de 200.487 víctimas del conflicto armado en Buenaventura⁴. La pérdida adicional de vivienda, bienes y documentación pueden profundizar vulnerabilidades acumuladas y dificultar una recuperación segura y sostenible.

Varios actores clave reportaron durante la evaluación, que la respuesta institucional aún no había llegado a las comunidades rurales evaluadas ni al barrio Alberto Lleras. Ante esta situación, las familias cuyas viviendas fueron destruidas y que carecen de una alternativa habitacional han recurrido a mecanismos de autoalbergue, alojándose en viviendas de familiares o miembros

de la comunidad, en espacios habilitados dentro de instituciones educativas o en carpas entregadas como parte de la respuesta de emergencia. En los hogares de acogida se reportaron altos niveles de hacinamiento y limitaciones para sostener estos arreglos en el tiempo, mientras que algunas familias alojadas en instituciones educativas carecen de condiciones adecuadas de saneamiento y privacidad.

En el barrio Alberto Lleras, las personas consultadas señalaron que el agua se filtraba a través del material de las carpas durante las lluvias, llegando a inundar su interior y afectar los espacios de descanso y las pertenencias. Asimismo, reportaron altas temperaturas dentro de las carpas, generando condiciones de calor intenso para las personas alojadas. Varias personas manifestaron que no deseaban trasladarse a albergues colectivos alejados de sus viviendas por temor a perder el acceso a sus predios y a las pertenencias que aún conservan. También señalaron que algunos de los albergues habilitados por la institucionalidad no contaban con condiciones básicas adecuadas, incluido el acceso a agua, lo que reducía su disposición a trasladarse a estos espacios.

La pérdida simultánea de vivienda, pertenencias y medios de vida limita significativamente la capacidad de los hogares para reconstruir sus viviendas o acceder por cuenta propia a soluciones de alojamiento más seguras y dignas, particularmente entre hogares con jefatura femenina.

En este contexto, la permanencia en soluciones precarias no responde únicamente a la falta de alternativas, sino también a preocupaciones relacionadas con la protección de la vivienda, el predio y las pertenencias, así como a las condiciones inadecuadas de algunas opciones de alo-

jamiento disponibles. La prolongación de condiciones de hacinamiento y alojamiento precario reduce la privacidad, aumenta la presión sobre las redes familiares y comunitarias de acogida y puede incrementar la exposición a distintos riesgos de protección.



3.3 Riesgo de reclutamiento, uso y utilización de NNA

El sismo ha reducido entornos protectores para NNA mediante daños en instituciones educativas y espacios comunitarios. Actores clave estimaron afectaciones en 35 establecimientos educativos⁵ y señalaron que, ante las disrupciones, las responsabilidades de cuidado recaen con mayor frecuencia en redes familiares, otros NNA o terceros. La menor supervisión y la pérdida de espacios seguros aumentan la exposición a violencia, explotación, trabajo infantil y separación familiar. En Buenaventura, este debilitamiento es especialmente relevante por

la presencia de GANE y GDO y los antecedentes de reclutamiento, uso y utilización de NNA advertidos por la Defensoría del Pueblo a través de su sistema de alertas tempranas⁶. Actores de la comunidad educativa señalaron además barreras para el acceso, permanencia y continuidad educativa, particularmente en zonas rurales. El sismo no origina este riesgo, pero la interrupción educativa, las limitaciones de conectividad y disponibilidad de dispositivos, y la reducción de espacios protectores pueden aumentar la exposición de NNA a estrategias de captación y vinculación.

5. <https://www.buenaventura.gov.co/articulos/alcaldia-de-buenaventura-destaca-avances-en-la-atencion-y-reconstruccion-tras-el-terremoto>

6. Defensoría del Pueblo. Alerta Temprana de Inminencia No. 003-21 por la situación de riesgo en el Distrito de Buenaventura. Sistema de Alertas Tempranas (SAT), 29 de enero de 2021.



3.4 Explotación, VBG y mecanismos de afrontamiento perjudiciales

Durante la evaluación se recogieron relatos de mujeres que señalaron situaciones en las que terceros solicitaron favores o servicios sexuales a cambio de dinero, bienes u otro apoyo material. Si bien los relatos recogidos no vinculan estos hechos con personal humanitario o institucional, evidencian cómo la pérdida de ingresos y las necesidades básicas insatisfechas pueden generar condiciones propicias para la explotación y otras formas de VBG. Las redes familiares y comunitarias han constituido un mecanismo central de protección y acogida tras el sismo; sin embargo, el hacinamiento y la prolongación de estos arreglos están aumentando la presión sobre su capa-

cidad de respuesta. Esta exposición puede verse agravada en hogares encabezados por mujeres cuando la pérdida de vivienda y medios de vida se combina con responsabilidades de cuidado y el debilitamiento de redes de apoyo. Asimismo, el hacinamiento observado en hogares y soluciones temporales de alojamiento reduce la privacidad y aumenta la presión sobre las redes familiares y comunitarias, pudiendo incrementar las tensiones intrafamiliares y comunitarias, la violencia y la explotación, así como el riesgo de expulsión o interrupción de los arreglos de acogida. También se identificó la mendicidad como estrategia de supervivencia ante la insuficiencia de recursos.



3.5 Exclusión de la asistencia, desinformación y riesgos para liderazgos comunitarios

El desconocimiento y la confusión respecto a los criterios de elegibilidad, procedimientos y rutas de acceso a ayudas y subsidios están generando rumores, expectativas no verificadas e incertidumbre entre la población afectada. Estas brechas de información pueden traducirse en exclusión de la asistencia y aumentar la exposición a engaños, estafas, fraude y otras formas de explotación. Para la población migrante venezolana, estimada por Migración Colombia en 3.450 personas en Buenaventura⁷, las barre-

ras relacionadas con el estatus migratorio, la documentación y el desconocimiento sobre los mecanismos de acceso a la respuesta pueden profundizar estas dificultades. Los liderazgos comunitarios cumplen un papel central en la identificación de necesidades, la caracterización de la población afectada y la articulación de la asistencia. Actores comunitarios reportaron casos de intimidación, amenazas y presión hacia liderazgos sociales y comunitarios. En un contexto donde las necesidades superan los recursos

7. Migración Colombia, Migrantes venezolanos en Colombia, tablero estadístico interactivo, consulta realizada el 10 de septiembre de 2026. Disponible en: <https://public.tableau.com/app/profile/migracion.colombia/viz/MigrantesvenezolanosenColombia-Junio2024/MigrantesvenezolanosenColombia>

disponibles, su participación en los procesos de identificación y priorización de hogares puede además exponerlos a señalamientos, estigmatización o conflictos derivados de percepciones de favoritismo o inequidad en la distribución de la asistencia. Adicionalmente, se reportó preocupación por presiones de GANE y GDO para influir

en los procesos de identificación, priorización o acceso a la ayuda humanitaria. Estas dinámicas refuerzan la necesidad de aplicar criterios transparentes de focalización, diversificar la interlocución comunitaria y mantener un análisis continuo del contexto y de los posibles efectos no intencionados de la respuesta humanitaria.



3.6 Afectaciones psicosociales acumuladas

De manera transversal, actores especializados identificaron necesidades significativas de salud mental y apoyo psicosocial (SMAPS) asociadas a la muerte o desaparición de familiares, la pérdida de vivienda, bienes y medios de vida, así como al temor persistente ante posibles réplicas. Estas afectaciones se superponen, para parte de la población, a experiencias previas de desplazamiento forzado y exposición prolongada a violencia vinculada al conflicto armado, lo que puede erosionar aún más las capacidades

individuales, familiares y comunitarias de afrontamiento. La persistencia de condiciones de alojamiento precario, incertidumbre frente a la recuperación y pérdida de medios de vida puede prolongar estas afectaciones y aumentar la necesidad de apoyos continuos. Aunque distintos actores han desplegado intervenciones de SMAPS, la cobertura y continuidad reportadas continúan siendo insuficientes frente a la magnitud de las necesidades identificadas.



4. Recomendaciones

4.1 Instituciones del Estado

- Priorizar soluciones de alojamiento seguras y dignas, acordes con las preferencias de los hogares y que permitan, cuando sea posible, permanecer cerca de sus viviendas y pertenencias, garantizando acceso a agua y saneamiento, privacidad, seguridad física y medidas de prevención frente a riesgos de protección, incluida la VBG y la violencia sexual.
- Implementar jornadas móviles para reposición de documentos de identidad y orientación sobre vivienda, tierra y propiedad, acompañadas de información oficial y accesible sobre criterios y rutas para acceder a ayudas y subsidios.
- Priorizar la prevención del reclutamiento, uso y utilización de NNA en sectores con presencia de GANE y GDO, mediante la reactivación de espacios protectores y mecanismos de detección y respuesta articulados entre autoridades educativas, ICBF y entidades territoriales
- Ampliar la cobertura de SMAPS comunitaria y especializada, articulando salud, protección y educación para identificar tempranamente a personas con necesidades de atención y asegurar continuidad de los servicios.
- Realizar seguimiento a riesgos de seguridad que enfrentan líderes y lideresas comunitarias involucrados en actividades relacionadas con la respuesta a la emergencia, impulsando mecanismos de prevención y protección para líderes sociales que puedan estar expuestos a amenazas, intimidaciones o presiones por parte de actores armados.
- Integrar en la respuesta humanitaria mecanismos transparentes de focalización y selección de beneficiarios que reduzcan la exposición de los liderazgos comunitarios a conflictos y señalamientos.

4.2 Organizaciones humanitarias

- Aplicar enfoques de acción sin daño para evitar que los procesos de focalización, registro y entrega de asistencia generen tensiones comunitarias o incrementen riesgos para líderes sociales, asegurando que el contacto comunitario se realice con más de un líder o representante.

- Fortalecer actividades de prevención y mitigación de riesgos de violencia basada en género en albergues colectivos, espacios comunitarios y puntos de distribución de ayuda, propiciando la difusión de mensajes de protección y acceso a rutas de atención para sobrevivientes y personas en riesgo de explotación.
- Mantener y reforzar las medidas de prevención de explotación y abuso sexual (PEAS/PSEA) en toda la respuesta humanitaria, bajo la socialización de los mecanismos de participación (sistemas PQRS) dispuestos en cada organización humanitaria.
- Implementar espacios seguros y actividades protectoras para NNA, con mecanismos claros de identificación y remisión de casos y coordinación con actores especializados en protección de la niñez.
- Incrementar la cobertura de intervenciones de SMAPS comunitarias y especializadas, priorizando personas en situación de duelo, hogares con afectaciones severas y población con antecedentes de exposición a violencia.
- Transferir capacidades a voluntarios y equipos comunitarios en primeros auxilios psicológicos y apoyo psicosocial básico, así como en servicios de orientación en el acceso a rutas de atención y servicios.
- Diversificar los mecanismos de información comunitaria para reducir la circulación de rumores y desinformación, a través del desarrollo de sesiones informativas comunitarias o redes oficiales de las organizaciones humanitarias presentes.